

01 DE DICIEMBRE DE 2019

Política exterior: problemas no resueltos y ausencias notorias-Análisis

(Olga Pellicer, p. 54-56)

En política exterior el primer año del gobierno de López Obrador tiene dos rasgos sobresalientes: la renuencia a tener presencia fuera del país y la decisión de ser amigable con el gobierno de Trump. El resultado ha sido ambivalente. Ha bajado el tono de hostilidad de Trump hacia México pero están sin resolver los puntos principales de la agenda. La decisión de no viajar al exterior ha subrayado la prioridad de los problemas internos, pero ha eliminado la presencia de México en foros de indudable utilidad para ejercer contrapeso a la vulnerabilidad frente a Estados Unidos. No recuerdo presidente de México que haya llevado a mítines populares el mensaje de buscar la conciliación con el gobierno del país del norte. Lo normal entre los dirigentes políticos era buscar el aplauso fácil que surge espontáneamente cuando se agita el nacionalismo frente a Estados Unidos. AMLO ha escogido una ruta novedosa; pide que alcen la mano para apoyar la amistad con Trump. Se distingue con ello no sólo de sus antecesores, sino de la mayoría de los líderes de izquierda en América Latina. En su vocabulario no tiene lugar el "imperialismo yanqui", clara distancia con movimientos como el chavismoe cuya cercanía se le acusaba tan intensamente.

El segundo punto que se encuentra en momentos difíciles es el asunto de la migración centroamericana en tránsito por México para ingresar a Estados Uni-dos. El fenómeno no es nuevo, ha estado presente con altibajos, parecidos a los que se presentaron este año, desde finales del siglo pasado. Lo que cambió fue el discurso y las acciones de Trump, inspirado por sus principales asesores, partidarios del supremacismo blanco y decididos a convertir a los solicitantes de asilo o refugio en una "amenaza" a la seguridad nacional de Estados Unidos.

No cabe recordar aquí la pre-sión ejercida por los dirigentes estadunidenses para convertir a México en un "tercer país seguro". Se ha evitado aceptarlo formalmente aunque, de facto, se han asumido compromisos que simplemente no son sostenibles. Tanto en la frontera norte como en la sur hay situaciones de extrema fragilidad, en las que ocurren violaciones de derechos humanos, actos de violencia, albergues saturados y fuera de control, acciones de la recién creada Guardia Nacional para la que no se tiene ni la preparación ni las líneas de mando adecuadas. Crisis de mayor envergadura pueden surgir en cualquier momento.

Saldo negativo de la estrategia anticrimen (Patricia Dávila, p. 26-28)

Ante la violencia causada por los cárteles de la droga que dominan 68% del territorio mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido su estrategia de "abrazos, no balazos". Por el contrario, sostiene su rechazo a

atender a las víctimas, como a Javier Sicilia, cuando respondió que "da flojera eso" de reunirse con el poeta y activista, quien se alista para salir de nuevo a la calle en exigencia de un mejor plan federal que atienda a un país que "arde" por el crimen. En el contexto del primer año de go-bierno, los esfuerzos de la administración federal han implicado también el establecimiento de 266 coordinaciones regionales a cargo de la Guardia Nacional; se trata de lugares donde se concentra el mayor grado de violencia.

El plan sobre la mesa

En la Ciudad de México, donde operan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Unión Tepito y la Antiunión Tepito, sólo la alcaldía de Azcapotzalco figura con un alto índice delictivo; ahí opera el grupo de Jalisco.En cambio, el Estado de México tiene 25 puntos considerados focos rojos por-que en ellos operan los cárteles de La Fa-milia Michoacana y el CJNG. El combate contra ambos grupos estará a cargo de te-nientes y coroneles de la Sedena.

Reprueban a AMLO

Pese a la logística plasmada en el papel, la Guardia Nacional no logra formarse y, por lo tanto, el balance del primer año de go-bierno es negativo, coinciden en entrevistas por separado María Elena Morera, de la organización Causa en Común, y Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Ha sido un año terrible: no sólo tene-mos un aumento sustancial de los crímenes en general, tenemos un alza de homicidios múltiples, una significativa expansión territorial de la violencia y un desmantela-miento de las instituciones a partir de las decisiones del Ejecutivo y de los recortes presupuestales que debilitan a los organismos que quedan", lamenta Rivas.

El papel de los militares

Sobre la Guardia Nacional, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, dice que la corporación existe sólo porque hay gente que porta un brazalete que dice "GN", pero que no ha habido un debido proceso de formación y homologación. Tampoco ve un plan para que esto suceda en los próximos meses. Otro problema que menciona es que varias zonas del país están bajo el control de los militares y existen policías que que-daron relegados a un segundo o tercer nivel, pese a que operaban como comisarios generales, con 20 o 30 años de experiencia. Hay errores preocupantes, insiste. "Nosotros (en el Observatorio) corrimos los programas sociales (del gobierno de López Obrador) contra ciertos datos de incidencia delictiva, de jóvenes y la participación del delito, de las bandas de la de-lincuencia organizada que operan en México... Lo que encontramos es que nada pega con lo que supuestamente nos dicen que van a hacer; no hay evidencia de que los programas sociales tengan ese efecto positivo."

Sin retorno





También para Morera el gobierno federal carece de una estrategia de seguridad. "Creo que se limita a emplear un conjunto de medidas aisladas. Por un lado, nos dicen que la Guardia Nacional es civil, pero en los hechos es militar porque la mayoría del personal son militares y quienes llevan el mando son militares. Tenemos una seguridad militarizada y con el riesgo de que quitaron a la Policía Federal. Y si la Guardia no funciona, no tenemos punto de retorno". También afirma que las policías estatales y municipales se siguen debilitando: "No vemos que haya una estrategia para fortalecerlas. Hace unos días la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sacó un documento para un modelo de policía; de hecho, Causa en Común les ayudó con un texto anexo para que puedan bajar este modelo al piso, pero apenas lo van a empezar a pilotear en seis municipios. Esto no es una estrategia"

"Las funciones de la Guardia no están claras: atienden delitos de alto impacto y también operativos para regresar a los niños a clase, **a migrantes**, feminicidios... Se están recargando demasiado en las Fuer-zas Armadas. Además, les dieron la cons-trucción del aeropuerto y que repartan libros de texto gratuitos. Son una cantidad de funciones que el Ejército no tenía."

Que AMLO deje de ser idealistay acepte ayuda: LeBarón (José Gil Olmos, p. 29-)

Semanas después de la matan-za de nueve miembros de su familia y en vísperas de la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, prevista para este lunes 2 en el Pa-lacio Nacional, Julián y Adrián LeBarón manifiestan que llegó el momento de que la sociedad mexicana se una para exigirle al gobierno que ponga un alto a la violencia que este año ha cobrado la vida de 30 mil personas. De las autoridades mexicanas los LeBarón expresan que esperan poco, porque a su ver se han corrompido en su esencia; por ello insisten en pedir ayuda internacional, incluida la de Estados Unidos, para enfrentar a los criminales que se han adueñado de regiones del país sin que en un año de gobierno López Obrador haya avanzado significativamente en su promesa de dar seguridad a la ciudadanía. Esta petición de ayuda al gobierno de Estados Unidos generó una riada de críticas, sobre todo luego de que en una entrevista a un medio de aquel país el presidente Donald Trump anunció motu proprio declarar terroristas a los narcotra-ficantes mexicanos y ofreció ayuda al gobierno de López Obrador para acabar con esos grupos criminales.

Comisión internacional de la verdad

Acompañado de Javier Sicilia, con quien marchará el 1 de enero para exigir un cambio en la estrategia del gobierno federal para disminuir la violencia, Julián LeBarón insiste en que la única forma de empezar a resolver este problema es con la unidad de la sociedad: "El problema es tan enorme que se han podrido las instituciones hasta la médula. Ni los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa ni Javier Sicilia ni nuestra familia hemos visto justicia, no se captura a los



responsables, se vicia el proceso, la impunidad es total. Entonces, la única forma de comenzar a combatir este proble-ma es con la unidad de la comunidad, no apoyar a quienes no resuelven nuestros problemas, retirarles el poder para usar todos esos recursos y contratar a profe-sionales para protegernos.

El video

Adrián LeBarón, padre de Rhonita y abuelo de cuatro niños calcinados, recalca sus dudas sobre la versión oficial de que hubo una confusión entre cárteles y exige que se ahonde en la investigación de la presencia de al menos 12 hombre armados y vestidos de negro que fue registrada en un video en manos de la Guardia Nacional. Una vez que balearon una de las tres camionetas, dichos sujetos recibieron la orden de quemarla. Ese video también fue visto por el expresidente municipal de Bavispe, Sonora, Adam Langford, quien declaró haber visto la grabación obtenida por la Guardia Nacional. Adrián LeBarón, de 58 años y nacido en Chihuahua, pero con nacionalidad mexicana y estadunidense, fue quien junto con Julián llegó primero al lugar y constató la masacre. Por ello fue testigo esencial tanto para la Guardia Nacional como para el FBI, que también investiga lo ocurrido.

Desapariciones forzadas: Muchos compromisos, ningún resultado

(Gloria Leticia Díaz, pág. 32-34)

Sin cambios sustanciales en la operatividad de la investigación de desaparición de personas, sin recursos suficientes para realizar diligencias ministeriales, sin los lineamientos básicos a nivel nacional para coordinar búsquedas de desaparecidos ni mucho menos la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda o un sistema de identificación forense eficiente, entre otras deficiencias institucionales, las declaraciones del presidente Andrés Ma-nuel López Obrador en las que considera una "prioridad" la atención a la tragedia humanitaria de la desaparición de personas, han ido perdiendo sentido a lo largo del primer año de gobierno.

Familiares de víctimas y organizaciones que los acompañan saben que la tarea de López Obrador no es fácil. El gobierno de Enrique Peña Nieto le "heredó" 40 mil desaparecidos, 37 mil cuerpos sin identificar y miles de restos óseos resguardados por servicios forenses del país, así como 3 mil 24 fosas con 4 mil 974 cuerpos, localizados entre 2006 y el 14 de agosto de 2019, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Pero como cabeza del Estado mexicano le toca al presidente dar respuesta a miles de familias de víctimas mas de los sexenios anteriores y las que se siguen acumulando en su administración. Proceso recabó testimonios de defensores y de familiares de víctimas de desaparición forzada y cometida por particulares, que advierten de los retos en la materia.

Familias defraudadas

De acuerdo con el documento presentado ante el Comité CEDAW, la madre de la víctima urge a que el caso sea admitido ante las omisiones del Estado mexicano para buscar a la joven, "y por la decisión de las autoridades de procuración de justicia de no investigar su privación de la liberad y desaparición como actos de violencia por razón de género, la existencia de estereotipos al abordar la investigación de los hechos, la ausencia de normas en el derecho penal interno que garanticen investigaciones con perspectiva de género cuando se investigan delitos del crimen organizado, y las fallas sistemáticas e ineficacia en la investigación". Se trata del primer caso relacionado con una desaparición llevado ante un órgano de la ONU, en el que de alguna manera se implica a la administración de López Obrador, antes de que siquiera se admita la competencia del Comité sobre Desaparición Forzada para llevar casos individuales, como se comprometió el presidente el 30 de agosto pasado.El incumplimiento de esa promesa es una molestia más para los colectivos de familias de desaparecidos integrados en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.

La esperanza en el gobierno se agota

Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, sostiene que para las familias de las víctimas "2019 fue un año perdido", pese a que el caso de las desapariciones forzadas por marinos durante los primeros cinco meses de 2018 es "el que tiene mayor evidencia jurídica contra integrantes de Fuerzas Armadas. Ni en el de Ayotzinapa hay tanta evidencia; y no entendemos por qué el de los estudiantes se lleva todos los reflectores, toda la atención federal. Nuestra solidaridad para las familias de los normalistas, pero el reclamo es para demostrar las preferencias que tiene el gobierno federal en este tipo de graves violaciones de derechos humanos". Las desapariciones forzadas en el país no paran. En tanto, las familias siguen espe-rando que se termine de formar el Sistema Nacional de Búsqueda, que por el momento cuenta con 28 comisiones estatales pero aún no se definen las unidades o fiscalías especiales de desaparecidos locales. Lo mis-mo sucede con el Plan Nacional de Búsqueda, los protocolos de búsqueda y el registro nacional de personas desaparecidas, entre otros lineamientos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, que no se han cumplido.

Cuando los "maras" llegan a Nueva York (Óscar Martínez, p. 70-72)

Pasaron muchas cosas, se derramó mu-cha sangre joven, pero fueron sobre todo las que ocurrieron en dos meses las que tienen a Long Island en titulares de todo el mundo. Long Island y unas siglas: MS. Mara Salvatrucha. El recuento de esos dos meses parece el recuento de lo ocurrido en una violenta colonia empobrecida de San Salvador, la capital de los homicidios. Sin embargo, pasó en Nueva York, en diferentes pueblitos de Long Island, no tan lejos de la Estatua de la Libertad. El primero de esos meses fue septiembre de 2016. El lunes 12, en un pueblo llamado

Mineola, mientras caminaba en la calle, fue asesinado a balazos un joven salvadoreño de 15 años, Josué Guzmán, estudiante de décimo grado. El día siguiente, un martes 13, cuando caía la noche en Brentwood, un grupo de jóvenes ase-sinaron con bates a dos muchachas justo afuera de la escuela Loretta Park donde estudiaban. Kayla Cuevas era una chica de raíces dominicanas de 16 años. Nisa Mickens, quin-ceañera, era una de sus mejores amigas. Ambas murieron aporreadas. Sus cadáveres quedaron a metros de distancia en un área residencial afuera de la escuela. El 16, la policía encontró el cadáver de Óscar Josué Acosta, salvadoreño de 19 años que tenía tres de haber llegado a Brentwood. Había desaparecido el 19 de abril. Cinco días después, el 21, la policía encontró otro cadáver. Lo encontró en la misma área que el anterior, en los alrededores boscosos de un hospital psiquiátrico abandonado que se llamaba Pilgrim. Se trataba del cuerpo de Miguel García, un ecuatoriano de 15 años. Había desaparecido siete meses atrás

–Éramos como seis amigos hispanos. No éramos de ninguna pandilla. Ya en la high school, con 15 años. Íbamos a jugar pelota a la cancha, ahí conocimos a más amigos. Ninguno era pandi-llero. Pero nos buscaban para darnos duro los de las dos letras (MS), los números (Barrio 18) y las pandillas de aquí, como los Bloods... a veces estaba en clases, y pasaban los mollos (negros) hablando: We are waiting, come on outside. El problema del muchacho que nació allá por el volcán Chaparrastique y que ahora habla en el Subway de Uniondale no era ser pandillero. Su problema era ser joven y centroamericano. Su problema era que podía ser pandillero. Era una amenaza, pues.

Uniondale es un suburbio de película. Grandes casas, calles anchas, verdes jardines, enormes carros. Afuera de muchas de esas casas hay no uno ni dos, sino cuatro o seis carros parquea-dos. Es porque en esas casas, no sólo de este pueblo, sino de los de alrededor, no vive una familia, viven cuatro o seis. Varias familias se apiñan en los diferentes cuartos de esas casonas que, siguiendo el cliché, invitan a hacer una parrillada sobre la ver-de grama. Esas casas son un cascarón de bienestar. Por dentro, muchas están a punto de estallar. En una de las calles principales de Uniondale hay un restaurante que recién abrió este mayo. Venden tacos y pupusas, sopa de gallina y hamburguesas. Es un restaurante para migrantes. Adentro se habla español y se toman cervezas Corona en un pequeño sótano iluminado por un foco pelón donde, por las noches, llegan mujeres gordas en diminutas calzonetas a intentar seducir a los hombres que juegan billar. Luego, les cobran. Por la compañía. Por el sexo, si es que llegan al acuerdo de irse a otro lugar o salir al callejón de al lado.